

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022).

PROCESO: MEDIDA DE PROTECCIÓN – INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO – CONVERSIÓN MULTA EN ARRESTO DE CARMEN CECILIA GARZON ROMERO EN CONTRA DE MIGUEL ANTONIO GARZON ROMERO. 2021-00011

ASUNTO:

Conforme a lo previsto en el art. 4º de la Ley 575 del 9 de febrero de 2000, que modificó la Ley 294 de 1996, procede el despacho a considerar la viabilidad de expedir la orden correspondiente, atinente a la efectividad de la determinación adoptada el 13 de enero de dos mil veintiuno (2021), por la Comisaría Quince de Familia de esta ciudad.

ANTECEDENTES:

Mediante providencia del 13 de enero de dos mil veintiuno (2021), la Comisaría Quince de Familia de esta ciudad, impuso multa al señor MIGUEL ANTONIO GARZON ROMERO, providencia que fue confirmada por este Juzgado, mediante sentencia de fecha 19 de mayo del año 2021.

Notificado por personalmente el señor MIGUEL ANTONIO GARZON ROMERO, de la confirmación de la resolución proferida por la Comisaría Quince de Familia de esta ciudad, y en consecuencia la sanción impuesta y le advirtió que cuenta con 5 días a partir de la misma, para consignar el valor de la sanción de la multa impuesta, so pena de hacerse acreedor a las sanciones allí indicadas.

Es de anotar que la multa impuesta al querellado tuvo su origen por el desacato a la medida de protección ordenada en decisión del 1 de julio de 2020, por la mencionada Comisaría.

Así mismo en providencia de fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno la Comisaría Quince de Familia de esta ciudad, ordenó remitir el expediente, para ser resuelta la conversión en arresto correspondiente al señor MIGUEL ANTONIO GARZON ROMERO como consecuencia de la no cancelación de la multa a él impuesta con ocasión al primer incidente de incumplimiento, razón por la cual fue ordenada su remisión.

CONSIDERACIONES:

Prevé el art. 4º de la ley 575 de 9 de febrero de 2000, que reformó el art. 7º de la Ley 294 de 1996, en su literal a) que el incumplimiento a las medidas de protección dará lugar a las siguientes sanciones:

Por la primera vez, multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco días siguientes a su imposición. La conversión en arresto se adoptará de plano mediante auto que sólo tendrá recurso de reposición, a razón de 3 días por cada salario mínimo.

De otro lado, establece el inciso 3º del art. 17 de la citada Ley (575 de febrero 9 de 2000), que cuando a juicio del Comisario sea necesario ordenar el arresto, luego de practicar las pruebas y oídos los descargos, le pedirá al Juez de Familia o Promiscuo que se expida la orden que corresponde, lo que decidirá dentro de las 48 horas siguientes.

A su turno, el inciso final ibídem, prevé que son aplicables al procedimiento previsto en esta Ley (575 de 2000), las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita. Y de conformidad con el capítulo V. art. 52 del decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, consagrado en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia, en materia de sanciones, determina que la persona que incumpliere una orden de un Juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

En sentencia C-175 de 1983, la Corte Constitucional señaló "...que únicamente las autoridades judiciales tienen competencia para dictar actos por medio de los cuales se lleve a cabo alguna de las actividades a que se refiere la norma dentro de las cuales se encuentra la imposición de penas privativas de la libertad. Por tanto y a la luz del citado canon ya no es posible que autoridades administrativas de cualquier índole impongan, para el caso en estudio, pena de arresto..."

En efecto la Corte Constitucional señaló en providencia C-024 de enero 27 de 1994, que "...La Constitución establece una reserva judicial a favor de la libertad individual, siendo indispensable el mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, para que una persona pueda ser reducida a prisión, arresto o detención. En adelante, solamente las autoridades judiciales tienen la competencia para imponer penas que conlleven la privación de la libertad. En consecuencia, a la autoridad administrativa le está vedado imponer a mutuo propio las penas correctivas que entrañen directa o indirectamente la privación de la libertad, salvo mandamiento escrito de autoridad judicial competente..."

Al tenor de la norma antes citada, igualmente en acatamiento a lo dispuesto en el art. 28 de la Carta Política, según el cual la privación de la libertad no puede efectuarse “sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente”, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley y de conformidad con las anotaciones jurisprudenciales, es este juzgado el competente para proferir la orden de captura y señalar el lugar de retención del demandado.

En igual sentido la misma Corporación en sentencia C-295 de 1996, señaló “...La orden de detención solo puede provenir de una autoridad judicial y en manera alguna es potestativo de los agentes de las administraciones seccionales como funcionarios administrativos que lo son...”.

En este orden de ideas, al querellado se le impuso pagar como multa, el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales, según consta en providencia del 13 de enero de dos mil veintiuno (2021) convertible en arresto en caso de incumplimiento de dicha decisión.

Según decisión emitida por la Comisaría Quince de Familia de esta ciudad, el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021), el accionado no acreditó el pago o consignación del valor de la mencionada multa, acontecimiento que tampoco ha demostrado en esta instancia.

*Así las cosas, acreditado como se encuentra el incumplimiento por parte del accionado, del pago de la multa impuesta de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se hace procedente convertirla en arresto a razón de tres (3) días por cada salario mínimo legal mensual, para un total de **SEIS (6) DÍAS**, sanción que deberá cumplir en las instalaciones de la Cárcel Distrital de esta ciudad, debiéndose para ello, solicitar de la Policía su captura y remisión a la Institución mencionada. En consecuencia, se comunicará esta decisión mediante oficio, al Comandante de Policía Metropolitana de Bogotá, a la citada Comisaría y al director de la mencionada cárcel, a quienes se les remitirá copia de esta providencia; y se dispondrá la oportuna devolución del presente diligenciamiento a la oficina de origen, previas las pertinentes constancias.*

*Por lo expuesto, el **JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.**,*

RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR el arresto de **MIGUEL ANTONIO GARZON ROMERO**, identificado con la C.C. No.79.660.857 de Bogotá, el que deberá cumplir en la Cárcel Distrital local, en virtud a la conversión de la multa que le fue impuesta por la Comisaría Quince de Familia de esta ciudad, confirmada por este Juzgado; de imponer dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a razón de tres (3) días por cada uno de ellos, para un total de **SEIS (6) DÍAS**, según acto administrativo y sentencia de fechas 13 de enero de dos mil veintiuno (2021) y 19 de mayo de 2021, esta última que la confirmó.

SEGUNDO: Para la captura, líbrese oficio al Comandante de Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG y a la Dirección de la Cárcel Distrital de esta ciudad, para que lo recluya, debiendo la Comisaría de Origen, tramitar los oficios originales, remitidos por este Despacho Judicial, anexos a la carpeta.

TERCERO: En firme esta decisión, devuélvase la actuación a la Oficina de origen, dejando las pertinentes constancias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MEJÍA MEJÍA
JUEZ.
(2)

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

El anterior auto se notificó por estado No. 42

Hoy 19 de abril de 2022

CAROLINA SANTAMARIA LUNA
Secretaria

Firmado Por:

Sandra Mejia Mejia

**Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0f65e6d2bfd00e64b1a3d035cc4f8b0d33859d9b74b619de2bf57eaacd99eaa**
Documento generado en 18/04/2022 06:04:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>